INFORME AL PARLAMENTO 2009

**INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE 2009**

CULTURA Y DEPORTES

SECCIÓN PRIMERA:

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Derecho a la cultura. Sobre el principio de transparencia y el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos en materia de cultura. . Pág. 3

SECCIÓN SEGUNDA:

ANÁLISIS DE LAS QUEJAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1. [INTRODUCCIÓN](#). Pág. 8
2. [ANÁLISIS DE LAS QUEJAS ADMITIDAS A TRÁMITE](#). Pág. 10
 2. 1. [Cultura](#). Pág. 10
 2. 1. 1. [La contaminación visual del patrimonio histórico y la protección del paisaje: dos aspectos de una misma realidad](#). Pág. 10
 2. 1. 2. [La necesaria protección de los conjuntos históricos](#). Pág.13
 2. 1. 3. [Protección de bienes patrimoniales](#). Pág. 17
 2. 2. [Deportes](#). Pág. 25
 2. 2. 1. [Accesibilidad en los centros deportivos](#). Pág. 25
 2. 2. 2. [Derecho de acceso a instalaciones deportivas municipales](#). Pág. 28

SECCIÓN CUARTA:

DE LAS QUEJAS REMITIDAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES

[ÁREA DE CULTURA](#). Pág. 31

Derecho a la cultura. Sobre el principio de transparencia y el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos en materia de cultura.

Aunque el principio de transparencia administrativa ya apareciera implícito en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando en su art. 15 proclama que *«la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de todo agente público de su administración»*, lo cierto es que la efectividad del derecho de petición tal y como aparecía reconocido en la Declaración precisaba de la previa articulación de unos mecanismos que hiciesen posible a la ciudadanía conocer cuál había sido el sentido de la actuación del agente público, a fin de poder valorar el acierto y la idoneidad de tal actuación y, en su caso, *pedir cuentas* a la Administración. Unos mecanismos de acceso y control que no se han articulado hasta fechas muy recientes, por lo que dicho principio de transparencia no ha tenido efectividad real hasta hace poco tiempo.

El principio de transparencia administrativa es vinculado por algún sector de la doctrina (Debbasch, Rivero) a los denominados derechos ciudadanos de tercera generación, de reciente configuración y positivación, e incluso es señalado en ocasiones como un hito del proceso evolutivo que lleva desde la democracia representativa, que asigna al Parlamento el monopolio en el control de la Administración, hacia la democracia participativa, en la que es la ciudadanía quien ostenta el protagonismo del control administrativo.

En este sentido, señala la profesora Rams Ramos que:

“a las clásicas garantías que establece el derecho administrativo, se viene a sumar el principio de transparencia, como sistema de control por los ciudadanos de la legalidad y de la correcta actuación de la Administración, de tal forma que, como tal mecanismo de garantía, resulta consustancial a un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro”.

La inclusión del principio de transparencia en el artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y su consideración como uno de los principios de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía, supone la culminación en el ámbito andaluz de un proceso íntimamente conectado con el proyecto de modernización de la Administración Pública que pretende acercar la gestión pública a la ciudadanía, fomentando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procedimientos administrativos que les afecten.

Se pretende con la consagración estatutaria de este principio de transparencia acabar con la práctica ancestral de nuestra Administración de mostrarse renuente a permitir el escrutinio público de su actuación administrativa. Una práctica, que venía dando lugar a una gestión pública oscurantista, desincentivadora del derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y esquiva del control de sus actos por los propios administrados.

El principio de transparencia encuentra su sustento fundamental en el artículo 23 de la Constitución Española que consagra el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos y se articula instrumentalmente en el art. 105.b) de la Carta Magna, que reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Un derecho de acceso cuyo desarrollo normativo se ha articulado especialmente en torno al art. 37 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Noviembre de 2000 (RJ 2001, 425), Ponente D. Juan Antonio Xiol Ríos, en su Fundamento Jurídico Quinto señala que:

«El derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la tercera generación.

Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos».

No obstante, pese a haber sido objeto de concreción mediante su desarrollo normativo en el art. 37 de la Ley 30/1992, esta misma Sentencia del Tribunal Supremo precisa que el derecho constitucionalmente reconocido en el art. 105.b) dispone de un núcleo esencial indisponible que no puede quedar condicionado ni limitado por su normativa de desarrollo, ni por las interpretaciones que de la misma se puedan realizar:

«Resulta, pues, evidente, que, en aplicación directa de la norma constitucional, este derecho exige, con el fin de respetar su núcleo esencial integrado por el haz de facultades que lo hacen reconocible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares, superando las limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente a los poderes públicos, el adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles, sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla («en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas») y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho».

El respeto escrupuloso por parte de la Administración Pública andaluza de ese núcleo esencial indisponible que integra el derecho constitucional de acceso a los archivos y registros administrativo, constituirá una de las pruebas más tangibles de la plena asunción por la Administración andaluza del principio de transparencia estatutariamente establecido.

En este sentido, para establecer una limitación en el acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos, en la medida en que contradice un derecho constitucionalmente garantizado, no bastará con una mera referencia a alguna de las excepciones contenidas en el propio artículo 105.b) de la Constitución -la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas- o con citar cualquiera de las salvedades contenidas en el art. 37 de la Ley 30/1992, sino que habrá que acreditar fehacientemente la necesidad de imponer tales limitaciones acreditando que es la única forma de salvaguardar unos derechos e intereses generales cuya protección, por mandato legal y constitucional, se eleva por encima de la que corresponde al propio derecho de acceso.

Dicho de otro modo, la aplicación de los límites al derecho de acceso debe hacerse con un criterio restrictivo, siempre de forma motivada y tratando en la medida de lo posible de preservar al máximo el ejercicio por la ciudadanía del derecho de acceso y el principio de transparencia en la actuación administrativa.

Si trasladamos estas premisas al ámbito de la administración cultural habremos de concluir postulando la necesidad de que el principio de transparencia sea la base del actuar administrativo en aquellos supuestos en que se demande el ejercicio del derecho

de acceso a archivos y documentos administrativos de contenido cultural en poder de dicha Administración.

Sin embargo, ésta no parece ser la práctica habitual en la Administración cultural andaluza ya que algunas de las quejas recibidas durante el año 2009 nos han permitido comprobar la renuencia de algunos organismos dependientes de la Consejería de Cultura a la hora de facilitar a la ciudadanía el acceso a archivos y documentos bajo su tutela administrativa y el escaso apego de dichos organismos a los postulados del principio de transparencia.

Particularmente significativa de cuanto exponemos resultó la **queja 08/2816**, planteada por un ciudadano que deseaba acceder a determinada documentación contenida en un expediente administrativo y referida a la restauración de un conocido Monumento cordobés, encontrándose con una Administración remisa a facilitar la información requerida y siempre presta a poner impedimentos formales o procedimentales ante los requerimientos de acceso.

De lo actuado en la tramitación de este expediente de queja nos interesa traer a colación en este apartado una de las conclusiones extraídas del análisis jurídico realizado en el mismo sobre la actuación administrativa, por cuanto vino a poner de manifiesto la regresión habida en materia de transparencia administrativa y fomento de la participación ciudadana en los asuntos culturales como consecuencia de la supresión en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, de la acción pública en materia de cultura.

A este respecto, conviene recordar que el artículo 8 de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, dispone lo siguiente:

«2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales contencioso-administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español».

Doctrina y Jurisprudencia han precisado suficientemente el instrumento jurídico de la acción pública contenido en este precepto legal, aclarando Alonso Ibáñez que se configura como una acción judicial otorgada a la ciudadanía, no como una reacción ante la lesión de un derecho subjetivo típico, sino como una reacción ante una lesión de un “*ámbito vital*” constitucionalmente garantizado, que reconoce a cualquier persona un interés habilitante para recurrir en vía administrativa y en vía contenciosa, resultando innecesario indagar la existencia e intensidad de ese interés.

Este autor considera la acción pública, no como una simple regla procesal, sino como un principio de derecho material en el que no se está atribuyendo a la ciudadanía una función abstracta de fiscalización de la observancia de la legalidad, sino que se les reconoce un verdadero derecho subjetivo para defender la legal actuación de los poderes públicos en aplicación de la normativa cultural.

En este mismo sentido, Abad Licerias señala que:

“la acción popular en materia administrativa implica el ejercicio privado de funciones públicas”. Añadiendo que “aunque el ciudadano que actúa posiblemente tiene su propio interés, lo que el ordenamiento protege es la legalidad, el servicio público, el respeto a la ley”.

Es cierto que en el supuesto analizado en la queja de referencia el promotor de la misma en ningún momento invocó el ejercicio de la acción pública como elemento legitimador de su pretensión de intervención en el procedimiento administrativo, no obstante, ello no debió ser óbice para que la Administración reconociera de oficio la existencia de legitimación suficiente en el solicitante en virtud de tal instrumento jurídico.

En este sentido, tal y como señala Olea Godoy, el carácter antiformalista que impregna nuestras leyes procesales *“haría sumamente difícil apreciar la inadmisibilidad del proceso por el mero hecho de no expresar el recurrente que tipo de acción ejercita, porque la legitimación debe concluirse de las mismas alegaciones y fundamento de la pretensión”*. A este respecto, procede citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 17 de julio de 2006 que proclama que «la persona que la ejercita (acción pública) no tiene que decir el tipo de acción que ejercita como ocurría con la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, le bastará con decir que se infringe el ordenamiento jurídico».

En cuanto a los efectos que tendría en el proceso administrativo el reconocimiento al promotor de la queja del derecho a ejercitar la acción pública, debemos decir que la misma implicaría que quedase investido él mismo de cuantos derechos se reconocen a las personas que ostentan la condición de interesado conforme al artículo 31 de la Ley 30/1992, salvo aquellos que, por tener relación directa con la defensa de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, no pudiesen ser ejercidos sino por quienes detentan los mismos.

En este sentido, Olea Godoy señala que *“la propia esencia de la acción popular, vinculada a una legitimación general y sin mayores limitaciones, permite su ejercicio, no sólo para iniciar el proceso, que sería el supuesto general, sino también la personación en cualquier fase posterior, en la medida que el proceso contencioso lo autoriza”*. Tesis apoyada en las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio 2005 y 12 de diciembre de 2006.

A este respecto, procede igualmente traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 700/2000, de 29 de Septiembre, que señala lo siguiente:

«(...) la tesis que sustenta la Administración demandada, contraria, según se desprende del contexto de la contestación, a la fijación del citado plazo, choca con la virtualidad y carácter operativo que hay que dar al artículo 8º de la Ley 16/1985. La actitud de los particulares no se limita al cumplimiento del deber de poner en conocimiento de la Administración competente los peligros de destrucción de los bienes de interés cultural del Patrimonio, sino que se instrumenta también en dicho precepto una acción pública para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en la Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, exigencia que comporta un correlativo deber de respuesta por los órganos jurisdiccionales que signifique, incluso, una condena a la Administración competente a que actúe realmente poniendo fin a su inactividad material».

En consecuencia, cabría concluir que en virtud de la acción pública reconocida legalmente en materia de cultura, no se puede aducir la falta de acreditación de la condición de persona interesada para limitar el ejercicio por la ciudadanía de su derecho de acceso a los archivos y registros administrativos.

A este respecto, y en relación con la institución de la acción pública en materia de cultura, conviene precisar que carece totalmente de relevancia el hecho de que tal instrumento jurídico no aparezca reconocido expresamente en la vigente Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, a diferencia de lo que ocurría con la precedente ley patrimonial andaluza, Ley 1/1991, que expresamente lo contemplaba en su artículo 5.2.

Las razones que hayan llevado al legislador andaluz a optar por suprimir cualquier referencia a la acción pública en la nueva Ley patrimonial andaluza las desconocemos puesto que nada se indica al respecto en la exposición de motivos del texto legal. No

obstante, resulta difícil apoyar tal decisión por cuanto la misma parece mostrar una voluntad del legislador de apartarse de una corriente legislativa, jurisprudencial y doctrinal que viene apostando desde hace ya tiempo por una ampliación de los ámbitos de participación ciudadana en los asuntos públicos, especialmente en aquellas materias relacionadas con los denominados derechos sociales de tercera generación, como son considerados, muy significativamente, los relacionados con la cultura, el urbanismo o el medio ambiente.

No obstante, pese a ser una decisión cuestionable, entendemos que la misma carece de especial trascendencia jurídica, por cuanto la acción pública viene reconocida en el ámbito de la cultura en el artículo 8.2 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, que, a estos efectos, tiene la consideración de legislación básica indisponible para el legislador autonómico.

En este sentido, conviene señalar que la acción pública incide directamente en un ámbito, como es el de la regulación general del proceso administrativo y jurisdiccional, cuya ordenación parece haber quedado reservada al Estado en función de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española, en sus apartados 6º y 18º.

A este respecto, entendemos que no entra dentro del ámbito de potestades del legislador autonómico la posibilidad de restringir un derecho que entronca no sólo con el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución, sino también con el derecho de igualdad en el acceso a la tutela judicial que preconiza el artículo 24 de la Carta Magna en relación con el artículo 14 del mismo texto.

Cuestión distinta, y merecedora de un análisis detenido, sería la posibilidad de reconocimiento de esta acción popular en el ámbito de leyes dictadas por el legislador autonómico en el marco de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, como de hecho ha ocurrido en algunas normas autonómicas medioambientales, urbanísticas y culturales. En estos supuesto lo que se produce es una ampliación de la legitimación procesal por parte del legislador autonómico. Posibilidad que, aunque discutible desde la perspectiva del principio de igualdad en el acceso a la justicia, no merece, a nuestro juicio, un rechazo tan palmario como la presunta intención restrictiva de la acción pública que parece derivarse del tenor de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En conclusión, dado que la acción pública en materia de cultura sigue siendo de aplicación en Andalucía por mandato del artículo 8.2 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, no parece tener sentido alguno, su deliberada supresión del articulado de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, por lo que debemos postular su pronta reintegración al acervo jurídico andaluz en materia de cultura.

SECCIÓN PRIMERA:

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

SECCIÓN SEGUNDA:

ANÁLISIS DE LAS QUEJAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1. Introducción.

El artículo 44 de la Constitución estipula que «los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». Por su parte, el artículo 33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que «todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz».

Estos dos preceptos, no sólo están consagrando como un derecho social básico de todas las personas el Derecho a la Cultura, sino que además están marcando claramente el ámbito a que ha de extenderse el ejercicio por esta Institución de su función legal de salvaguarda y garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía reconocidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este sentido, una de las misiones esenciales del Área de Cultura y Deporte de esta Institución en relación con el ámbito de la cultura es supervisar la actuación de las Administraciones Andaluzas que asumen competencias en materia de Cultura a fin de comprobar que dichas Administraciones dan cumplimiento al mandato constitucional y estatutario de promover y tutelar el acceso de todas las personas a la cultura.

Por otro lado, este Área de Cultura y Deporte asume como función propia comprobar el cumplimiento por la Administración Cultural Andaluza de la obligación de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de Andalucía, que le encomienda la Constitución en su artículo 46, a la vez que velar por el respeto a lo dispuesto en el artículo 37.1.18º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que consagra, como principio rector de las políticas públicas «la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco».

Por otra parte, la Constitución establece en su artículo 43.3 que «los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio», lo que convierte el fomento del Deporte en uno de los principios rectores de la política social del Estado.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye en su artículo 72 a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, el deporte. Competencia que ha venido desarrollando tanto en los aspectos legislativos como ejecutivos, debiendo destacarse, a estos efectos, la aprobación de la Ley 6/1998, de 14 de Diciembre, del Deporte, que garantiza en su artículo 2.a) «el derecho de todo ciudadano a conocer y practicar libre y voluntariamente el deporte en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna».

Por ello, la función tuteladora de derechos que el Área de Cultura y Deporte asume en relación al ámbito deportivo se concreta sustancialmente en velar porque este derecho esencial al deporte que toda persona tiene, constitucional y estatutariamente garantizado, sea una realidad plena.

Con estos objetivos, nuestra labor de supervisión se extiende y afecta a todas las Administraciones Andaluzas con competencias en materia de cultura y deporte, ya sean las Entidades Locales o los distintos órganos que conforman la Consejería de Cultura y los órganos específicos de la Consejería de Turismo y Deporte con competencias en el ámbito deportivo.

Una vez delimitado nuestro ámbito de actuación, vamos a entrar en el aspecto estadístico. A estos efectos, y contabilizando exclusivamente los expedientes de queja iniciados por el Área de Cultura y Deporte durante el año 2009, comprobamos que los mismos suman un total de 103.

De este total de 103 quejas, 100 fueron iniciadas a instancia de parte interesada y 3 fueron consecuencia de una actuación de oficio de esta Institución.

A este número de 103 quejas iniciadas durante 2009, hay que sumar un total de 75 quejas que, aunque iniciadas en años anteriores, han continuado su tramitación durante ese año, con ello tendremos el total de 178 quejas tramitadas por el Área de Cultura y Deportes durante 2009.

De las 103 quejas iniciadas por el Área de Cultura y Deporte en 2009, al finalizar el año, 51 habían concluido su tramitación, otras 27 permanecían aún en trámite, 23 no fueron admitidas y 2 quejas fueron remitidas al Defensor del Pueblo del Estado por referirse a un asunto de su competencia.

La distribución por materias fue la siguiente: 82 quejas referidas a cultura y 21 quejas afectantes a deportes.

Por lo que se refiere al grado de colaboración con esta Institución mostrado por las diferentes administraciones interpeladas en el curso de nuestras actuaciones, debemos decir que la misma ha sido en líneas generales adecuada, aun cuando se hayan producido dilaciones puntuales en algún expediente de queja que finalmente quedaron solventadas.

No obstante, debemos dejar constancia de la existencia de un expediente de queja en el que las resoluciones dictadas por el Defensor del Pueblo Andaluz que no han obtenido la respuesta colaboradora de las Administraciones Públicas, que resultaba esperable a tenor del artículo 29.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz:

Nos referimos a las Resoluciones relativas a la actuación urbanística del Ayuntamiento onubense de la Palma del Condado que supuso el derribo de la chimenea alambique de la Bodega Verdier, fundada en 1890, y que fueron dirigidas a la Consejería de Cultura y al propio Ayuntamiento de La Palma del Condado en el curso de la **queja 07/5430**.

De otro lado consideramos interesante reseñar, de entre las quejas iniciadas de oficio por esta Institución en materia de cultura, la **queja 09/4621** referida a la situación de deterioro en que se encontraba la Puerta de Elvira, un arco de la Muralla de la ciudad de Granada catalogado como Bien de Interés Cultural.

Asimismo, debemos citar la **queja 09/5765**, iniciada de oficio por esta Institución con objeto de comprobar la veracidad de las denuncias publicadas en algunos medios de comunicación relativas a un supuesto deterioro de la Muralla de la ciudad de Niebla (Huelva).

Para terminar esta introducción vamos a referirnos al esquema elegido para la dación de cuentas de las quejas tramitadas durante 2009.

Las cuestiones que van a ser analizadas en materia de cultura son las siguientes:

- La contaminación visual del patrimonio histórico y la protección del paisaje: dos aspectos de una misma realidad.
- La necesaria protección de los Conjuntos Históricos.
- Diversos supuestos de intervención ante situaciones de riesgo para inmuebles protegidos.

Por lo que se refiere a la materia de deportes, las cuestiones a analizar serán las siguientes:

- La accesibilidad en las instalaciones deportivas.
- Derecho de acceso a instalaciones deportivas municipales.

2. Análisis de las quejas admitidas a trámite.

2. 1. Cultura.

2. 1. 1. La contaminación visual del patrimonio histórico y la protección del paisaje: dos aspectos de una misma realidad.

Como es bien sabido el valor cultural de un inmueble incluido dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico no viene dado sólo por los valores históricos o artísticos del propio Bien, sino que con frecuencia, dicho valor depende de lo que culturalmente representa ese Bien para la sociedad en que se ubica. Es decir el valor cultural de un Bien muchas veces no es intrínseco al propio Bien, sino que está residenciado en la forma como los demás lo perciben. Podríamos, siguiendo este criterio, relacionar el valor de un Bien patrimonial con su capacidad para servir de referente cultural o identitario a un pueblo.

Esta capacidad simbólica de los bienes patrimoniales, al depender directamente de la forma en que son percibidos por la colectividad, ha determinado que en ocasiones sea mas relevante para un Bien su propia “visibilidad”, esto es, su aptitud para ser contemplado y percibido, que su “singularidad” artística o histórica.

A modo de ejemplo, podríamos citar el caso de la Torre del Oro sevillana, mundialmente conocida y convertida en uno de los referentes culturales e históricos de la ciudad hispalense al simbolizar en alguna medida los años de esplendor que vivió la villa andaluza cuando era el puerto de llegada del comercio proveniente de Las Indias tras el descubrimiento de América.

Pocos conocen que la Torre del Oro tiene una hermana gemela denominada Torre de la Plata, ubicada a escasos metros de la primera, y cuyo valor en estrictos términos históricos o artísticos en nada desmerece de su par.

Y la razón de este desconocimiento no es otro que el hecho de que la Torre de la Plata ha permanecido durante muchísimo tiempo oculta por una serie de edificaciones que se adosaron a la misma una vez perdió su función inicial y quedó integrada en la trama urbana. Por el contrario la Torre del Oro, merced a su privilegiada ubicación junto al cauce del río, ha permanecido exenta de cualquier obstáculo que impidiera o dificultara su contemplación convirtiéndose así en uno de los hitos visuales de la ciudad, especialmente para quienes acceden a la misma por vía fluvial.

La Torre de la Plata, hasta que hace pocos años se liberó parcialmente de las edificaciones que la encorsetaban era una perfecta desconocida para los propios sevillanos. Hoy en día es más conocida, pero en ningún caso puede compararse su relevancia con la de la Torre del Oro en el imaginario colectivo de los sevillanos.

Y la principal, sino la única diferencia entre estas dos Torres es que una ha estado siempre “visible” y la otra no.

Si quisiéramos seguir con este juego de los ejemplos podríamos preguntarnos por el grado de incidencia tiene en la valoración cultural de un monumento como la Alhambra granadina el hecho de su especial ubicación física como atalaya sobre la ciudad –o mejor dicho la forma en que se percibe visualmente desde la propia ciudad- y plantearnos si sería igualmente valorada si estuviera situada en el centro de la ciudad rodeada de otros inmuebles que impidiesen o dificultasen su contemplación.

Algo parecido podríamos hacer en relación a la Mezquita cordobesa jugando con la posibilidad de que la misma hubiera estado situada sobre un loma que dominase la ciudad o simplemente hubiese permanecido exenta de las muchas edificaciones que actualmente la rodean y dificultan su contemplación, ¿hasta qué punto hubiese cambiado su valoración patrimonial o cultural?

Lo que nos interesa destacar con este aparente juego de virtualidades no es otra cosa que la importancia que reviste para un bien cultural la visibilidad del mismo, esto es, la posibilidad de ser adecuadamente contemplado y percibido.

Consciente de esta importancia, el legislador cultural construyó conceptos jurídicos como “entorno” o “contaminación visual”, tratando con el primero de ellos de garantizar al Bien cultural un perímetro de protección física en el cual estuviese prohibida o limitada cualquier actuación que alterase o dificultase la percepción del Bien, y pretendiendo, con el segundo de los conceptos citados, dotarse de una herramienta práctica para evitar los atentados o agresiones visuales contra los mismos Bienes.

Pese a tratarse de dos conceptos de reciente incorporación al acervo jurídico del patrimonio histórico, lo cierto es que en este tiempo ya se han revelado en diversas ocasiones como elementos importantes para la protección y salvaguarda de los valores culturales de un importante número de Bienes.

Así, gracias a la delimitación de entorno de algunos BIC se ha podido evitar que se consumen graves atentados contra los mismos alentados por la voracidad urbanística de los últimos años y que hubieran supuesto su desvirtuación o desvalorización al impedir su adecuada contemplación.

De igual modo, gracias a la técnica jurídica de la “contaminación visual” se han podido evitar agresiones directas contra bienes patrimoniales que hubieran implicado una degradación de sus valores culturales al impedir o distorsionar su correcta contemplación o percepción.

No obstante, pese a su trascendencia y efectividad estos conceptos jurídicos se han revelado como insuficientes para cubrir todo el haz de posibilidades de afección negativa a los valores patrimoniales de un Bien como consecuencia de actuaciones que impliquen la alteración o disminución de sus valores perceptivos.

Y ello es así, por cuanto la virtualidad de estas figuras jurídicas queda circunscrita a un perímetro físico estrictamente delimitado y que rara vez alcanza más allá de los espacios inmediatamente aledaños al propio Bien. De hecho la propia Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía señala en su Disposición Adicional Cuarta que, en aquellos supuestos en que no se hubiese delimitado formalmente el entorno de protección de un Monumento o Castillo, el mismo estaría constituido «por aquellas parcelas y espacios que los circundan hasta las distancias siguientes:

- A) Cincuenta metros en suelo urbano.
- B) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable».

Si tomamos en consideración que el artículo 19 del mismo texto legal establece que sólo existirá “contaminación visual” cuando la acción contaminante afecte al propio Bien integrante del Patrimonio o a “su entorno”. Comprobaremos que el entorno, formal o legalmente delimitado de un Bien, marca el terreno máximo donde estas figuras de protección del patrimonio pueden ejercer su labor tuitiva sobre el mismo.

El problema surge en aquellos supuestos en que las actuaciones supuestamente atentatorias contra los valores perceptivos de un Bien patrimonial se producen en territorios ubicados más allá del límite fronterizo marcado por su delimitación de entorno. En esos supuestos, si examinamos nuestro ordenamiento jurídico, comprobaremos que el mismo carece actualmente de instrumentos válidos y eficaces que permitan salvaguardar los Bienes de las amenazas que se ciernen sobre ellos.

No obstante esta situación podría cambiar -de hecho debería cambiar- en un futuro próximo como consecuencia de la ratificación por España de un instrumento normativo de ámbito europeo que está llamado a tener una especial incidencia en la protección de los valores perceptivos de los Bienes Culturales.

Nos referimos, evidentemente, al Convenio Europeo del Paisaje aprobado en Florencia el 20 de Octubre de 2000 y ratificado por el Reino de España el 6 de Noviembre de 2007.

Este instrumento jurídico contiene las premisas fundamentales a partir de las cuales resultará posible desarrollar estrategias que otorguen una protección efectiva a los valores paisajísticos de algunos Bienes naturales o culturales.

No obstante, a la presente fecha y pese a la teórica aplicabilidad directa del Convenio desde su ratificación por España, la realidad es que resulta muy difícil trasladar los postulados proteccionistas contenidos en el texto del Convenio a los supuestos concretos de paisajes culturales amenazados ya que carecemos de criterios valorativos claros para determinar que elementos paisajísticos son merecedores de una especial protección y cuando una actuación concreta atenta contra dichos valores paisajísticos y, lo que quizás sea aun más relevante, no disponemos de instrumentos jurídicos concretos para su efectiva protección.

En este sentido, y con el fin de promover un rápido desarrollo normativo del Convenio Europeo de Paisaje en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Institución ha iniciado una actuación de oficio **-queja 09/5882-** cuya finalidad es acopiar información suficiente para conocer las actuaciones desarrolladas o que esté previsto desarrollar por las distintas Administraciones Públicas de Andalucía cuyas competencias tienen relación con la protección del paisaje a fin de dar efectividad al derecho consagrado en los artículos 28 y 33 del estatuto de Autonomía para Andalucía.

Mientras tanto no se produzca el desarrollo normativo del Convenio Europeo del Paisaje seguiremos careciendo de criterios válidos para evaluar la incidencia de una determinada actuación sobre los valores paisajísticos insitos en un Bien cultural y, lo que es más importante, careceremos de instrumentos eficaces para impedir que dichos valores puedan verse menoscabados.

Por tal motivo, la intervención de esta Institución en relación con las posibles agresiones a los valores visuales y perceptivos de los Bienes culturales viene sustanciándose fundamentalmente a través de los conceptos jurídicos de la delimitación de entorno y la contaminación visual.

Así, durante el año 2009 se tramitaron un total de 7 expedientes de queja relacionados con esta cuestión **-queja 09/4517, queja 09/5091, queja 09/5407, queja 09/6072, queja 09/433, queja 09/434 y queja 09/1868-**. De entre estas quejas, y a fin de ejemplificar el contenido de las mismas, podemos destacar la **queja 09/4517** referida a una posible contaminación visual de la Muralla del Real Alcázar de Sevilla.

El expediente se inició por denuncia de un particular referida a la existencia de unos cuadros y registros eléctricos de grandes dimensiones, así como cableado de diverso tipo, que se encontraban adosados a un lienzo de la muralla exterior del Real Alcázar de Sevilla, concretamente en la zona que linda con los Jardines de Murillo, próxima a una guardería infantil que existe en dichos Jardines.

El denunciante consideraba que estos elementos producían una contaminación visual que afectaba a la contemplación de un Bien de Interés Cultural y que, por tanto, contravenían los criterios de protección estipulados en la vigente legislación de Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía, concretamente en el artículo 19.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

Según relataba el promotor de la queja, había presentado diversos escritos denunciando el problema ante la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Sevilla y el Patronato del Real Alcázar, sin que los mismos hubieran dado el fruto esperado, razón por la cual interesaba la intervención de esta Institución.

A este respecto y tras las oportunas gestiones con los organismo implicados pudimos conocer que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla había procedido a retirar los cuadros eléctricos y el cableado denunciados de la Muralla del Alcázar, ordenado la incoación de expediente sancionador contra las personas o entidades responsables de su instalación sin contar con las autorizaciones preceptivas.

A la vista de esta actuación administrativa consideramos que el problema denunciado se encontraba en vías de ser solucionado por lo que acordamos en archivo de nuestras actuaciones.

2. 1. 2. La necesaria protección de los conjuntos históricos.

Esta Institución viene insistiendo desde hace bastantes años en la necesidad de que los municipios que cuenten con conjuntos históricos declarados como tales procedan con la

mayor rapidez a la aprobación de los oportunos planes especiales de protección, o bien incluyan las disposiciones para la protección específica de los mismos en el Plan General de Ordenación, acompañando el mismo del oportuno catálogo de bienes protegidos.

A tal fin venimos postulando desde hace tiempo la necesidad de una mayor implicación de la Consejería de Cultura en esta cuestión, tanto para compeler a los Ayuntamientos a aprobar el planeamiento de protección sin más dilaciones, como para ofrecer a los mismos la colaboración técnica y económica que precisen a tal fin.

No obstante, la conveniencia de una mayor implicación de la Consejería de Cultura para conseguir que los Ayuntamientos avancen en la elaboración y aprobación de este planeamiento de protección de sus conjuntos históricos no debe interpretarse como un llamamiento a la acción unilateral por parte de dicha Consejería en detrimento de los ámbitos competenciales de los municipios consagrados en el principio de autonomía local, salvo en aquellos supuestos excepcionales en que la absoluta renuencia a actuar por parte de algún municipio pusiera objetivamente en riesgo los valores patrimoniales del conjunto histórico.

Como regla general esta mayor implicación de la Consejería de Cultura en la elaboración por los Ayuntamientos del planeamiento de protección de sus conjuntos históricos debería encauzarse fundamentalmente por la vía de la colaboración y la asistencia técnica y económica al municipio, resolviéndose las posibles controversias sobre el alcance y contenido del planeamiento por medio del diálogo y el consenso y tratando de huir de posturas de imposición ya que no debemos olvidar que una vez aprobado el planeamiento de protección cabe la delegación competencial en los municipios, los cuales pasan, de este modo, a ejercer un papel primordial en la protección efectiva y cotidiana del conjunto histórico.

En este sentido, debemos mostrar nuestra preocupación por la situación que se nos traslada en el expediente de la **queja 09/5780**, afectante al municipio sevillano de Marchena, cuyo Ayuntamiento solicitaba la mediación de esta Institución ante la Consejería de Cultura en relación al procedimiento incoado por Resolución de dicho organismo de 8 de Septiembre de 2008 para la ampliación de la delimitación del Conjunto Histórico de la localidad.

El Consistorio manifestaba su discrepancia con la extensión de la nueva delimitación que consideraba desproporcionada y carente de la necesaria justificación histórica o cultural.

Según exponía, por parte del Ayuntamiento y con el respaldo unánime de todos los grupos políticos municipales, se habían presentado alegaciones al expediente en curso en las que de forma amplia y detallada se documentaban las razones por las que se oponían al proyecto de nueva delimitación del conjunto histórico de Marchena.

Asimismo, el Ayuntamiento había propuesto una alternativa al proyecto de nueva delimitación del Conjunto Histórico, consistente en una ampliación del Catálogo de Edificios Protegidos para incluir aquellos inmuebles que la Consejería de Cultura estimase necesario dotar de protección y que actualmente se encontrasen fuera del Conjunto Histórico delimitado.

El Sr. Alcalde mostraba su preocupación por lo que consideraba una postura poco dialogante de la Consejería de Cultura que se manifestaba en la negativa de la misma a entablar un proceso de negociación abierta con el Ayuntamiento para tratar de encontrar

una solución que tomase en consideración los intereses de todas las partes sin menoscabar la adecuada salvaguarda del patrimonio histórico de Marchena.

A juicio del promotor de la queja resultaba insólito que por la Consejería de Cultura se acometiera una ampliación de tanta envergadura de la delimitación del Conjunto Histórico de una localidad, con las consecuencia que ello implicaba para la vida económica, cultural y social de la misma, sin que previamente se hubiese intentado consensuar su alcance con quien ostenta la legítima representación del municipio.

Por todo ello, solicitaba la mediación de esta Institución a fin de conseguir que por la Consejería de Cultura se abordase con espíritu abierto y constructivo un proceso de debate y negociación con el Ayuntamiento que posibilitase la adopción de un acuerdo aceptable para todas las partes y que garantizase la protección del patrimonio histórico de dicha localidad

Estimando razonable la petición que se nos hacía llegar desde el Ayuntamiento y a fin de dar satisfacción a la petición que se nos había hecho llegar por parte del mismo, nos permitimos dirigirnos a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla a fin de mediar ante la misma con objeto de que se aceptase la petición de quienes ostentaban cargos de responsabilidad municipal de iniciar un proceso de negociación en relación con el procedimiento incoado para la ampliación de la delimitación del Conjunto Histórico de Marchena.

A la fecha de redacción de este Informe aun no se ha recibido la oportuna respuesta desde la Consejería de Cultura, que esperamos positiva por cuanto creemos que un acuerdo en esta materia puede resultar esencial para garantizar un compromiso compartido por parte de todas las Administraciones en la tarea común de tutelar los bienes patrimoniales integrados en el conjunto histórico.

En todo caso, y aun siendo siempre preferible la opción dialogada y consensuada, debe quedar clara la necesidad de que, en un plazo breve de tiempo, no sigan existiendo en Andalucía municipios con conjuntos históricos que no cuenten con planeamiento de protección debidamente actualizado.

Y es que hasta tanto no se dote a estos conjuntos históricos de la protección jurídica que precisan seguirán produciéndose actuaciones que desvirtúen sus valores o afecten a su integridad, amparándose en las vaguedades o imprecisiones de las normas obsoletas que los regulan.

Tal viene siendo el caso en el municipio de Cazorla (Jaén) donde siguen produciéndose actuaciones que pueden desvirtuar los valores patrimoniales del conjunto histórico sin que exista una norma clara que delimite las fronteras entre lo permitido y lo prohibido, dadas las ambigüedades e imprecisiones de las Normas Subsidiarias que resultan ser, a falta de planeamiento especial de protección o de Plan General de Ordenación, la única normativa de aplicación al conjunto histórico.

A este respecto, debemos proseguir con el relato iniciado en el Informe Anual de 2008 de la **queja 07/2632**, referido a la autorización por el Ayuntamiento de Cazorla de una construcción enclavada dentro del espacio urbano declarado Conjunto Histórico-Artístico y bajo las murallas del Castillo de la Yedra, que, a juicio de los denunciantes, rompía la armonía del entorno y afectaba negativamente a la contemplación de dicho Monumento ocasionando contaminación visual y paisajística.

En el Informe Anual de 2008 incluíamos un extenso relato de las numerosas actuaciones y vicisitudes habidas en el curso de la tramitación de este expediente de queja y

concluíamos mencionando la Resolución girada al Ayuntamiento de Cazorla en orden a la revisión de oficio del acuerdo plenario que dio lugar a la aprobación del instrumento de planeamiento con el Título “*Innovación del Planeamiento General de Cazorla: Modificación de las Ordenanzas Particulares referentes a las condiciones de volumen, diseño, higiénicas y de calidad*”, indicando que estábamos a la espera de evaluar la respuesta del Consistorio a dicha Resolución y asumiendo el compromiso de informar del resultado de dicho expediente de queja en próximos Informes Anuales.

En este sentido, y dando cumplimiento al compromiso asumido, debemos comenzar señalando que la respuesta del Ayuntamiento de Cazorla a la resolución que le fue trasladada consistió en la remisión de certificado del acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada el 26 de Febrero de 2009 por el que se acordó la no procedencia de la incoación de expediente de revisión de oficio del acuerdo de Pleno de 23 de Septiembre de 2004 por el que se aprobaba definitivamente el instrumento de planeamiento mencionado, así como la improcedencia de declarar lesivo el acto en cuestión.

A la vista del contenido del citado acuerdo del Pleno debimos entender que por el Ayuntamiento se rechazaba el contenido de la Recomendación formulada por esta Institución con fecha 5 de Agosto de 2008.

A este respecto, tras analizar las razones expuestas en dicho acuerdo Pleno para desestimar la Resolución, esta Institución se ratificó plenamente en el sentido de la Recomendación formulada y en los argumentos que sirvieron de fundamento a la misma, entendiendo que resultaba procedente su aceptación y cumplimiento por el Ayuntamiento.

En consecuencia, dado que carecemos de poderes coercitivos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, procedimos a acordar la inclusión del expediente en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía a fin de dar cuenta al mismo de la resolución formulada y de la desestimación de la misma por la Corporación Municipal. Compromiso que, con estas líneas, damos por cumplido.

Asimismo, en el curso de dicho expediente de queja nos hemos permitido recordar al Ayuntamiento de Cazorla la **Recomendación** que ya le fuera dirigida por esta Institución con fecha 17 de Agosto de 2007, con ocasión de la tramitación del expediente de **queja 06/3680**, por la que se instaba a esa Corporación a la urgente elaboración y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que debería venir a sustituir a las Normas Subsidiarias de Planeamiento en vigor.

El motivo de este Recordatorio es por cuanto consideramos que el cumplimiento de esta Recomendación con la aprobación de este Plan General, o en su caso de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, al exigir el previo informe de la Consejería de Cultura, hubiera permitido solventar la situación creada con la irregular aprobación en 2004 del Instrumento de Planeamiento que era objeto de debate en el expediente de queja, ya que dicho Plan General o Especial integraría las determinaciones urbanísticas controvertidas.

Por lo que se refiere a la adecuación a la legalidad del edificio construido en las proximidades del BIC Castillo de la Yedra, que, debemos recordar, constituía el motivo primordial del presente expediente de queja, la Institución prosiguió su proceso de acopio de información. En concreto se realizaron diversas actuaciones ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte –actualmente

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio- a fin de allegar diversa información y documentación necesaria para resolver el expediente de queja.

Una vez en disposición de la información requerida y tras analizar detenidamente la misma y ponerla en relación con las normas de aplicación al presente supuesto, esta Institución hubo de concluir señalando que podría haberse vulnerado el principio de buena administración contenido en el art. 31 del estatuto de Autonomía para Andalucía con el resultado de una afección negativa para el patrimonio histórico que entraría en contradicción con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Española y en los arts. 33, 36.1.f) y 37.1.18 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En consecuencia, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983 de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló al Ayuntamiento de Cazorla una **Resolución** con el siguiente contenido:

*“**Recomendación** de que se inicie procedimiento para la revisión de oficio de la licencia municipal de obra otorgada a Castillo de las Tres Esquinas S.L. en las calles Camino del Ángel y Hoz Alta por no ajustarse a la normativa urbanística que le resulta de aplicación.*

***Recomendación** de que en lo sucesivo se respeten escrupulosamente las determinaciones de la normativa que resulte de aplicación en el otorgamiento de licencias urbanísticas.”*

La respuesta recibida del Ayuntamiento de Cazorla respecto de la Resolución que le fuera formulada desestimaba la aplicación de la misma en base a los siguientes argumentos:

“(…) analizados y ponderados en profundidad los intereses implicados en dicho asunto, que no son otros que los de las familias que habitan las viviendas de la edificación objeto de licencia, y considerados, por otra parte, los límites que la legislación vigente establece para el ejercicio de las facultades de revisión de oficio, entre las que se encuentra la imposibilidad de ejercer las facultades de revisión cuando su ejercicio resulte contrario a los derechos de los particulares, para esta Alcaldía, al día de la fecha, no resulta conveniente el inicio de tales facultades revisoras”.

Una vez más nos vimos obligados en el presente expediente a acordar la inclusión del mismo en el Informe Anual a fin de dar cuenta de la negativa injustificada del Ayuntamiento de Cazorla a aceptar la Resolución que le fue oportunamente trasladada.

2. 1. 3. Protección de bienes patrimoniales.

En el presente apartado pretendemos dar cuenta de varios expedientes iniciados de oficio durante 2008, aunque su tramitación se ha realizado fundamentalmente durante 2009, que presentan como nota común la de derivarse del conocimiento por esta Institución de la situación de riesgo en que se encontraba algún Bien integrante del Patrimonio Histórico andaluz.

Veamos en primer lugar la **queja 08/2898**, iniciada tras tener conocimiento del estado de abandono en que se encontrarían las "Torres de Fahala" en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande. La información disponible destacaba la importancia arqueológica del paraje y su belleza paisajística, reclamando su puesta en valor y la recuperación, en lo posible, de la antigua fortaleza árabe.

Conviene señalar que el Castillo o Torre de Fahala se encuentra inscrito en el Catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía como Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.

Según la información que había podido recabar esta Institución, el Ayuntamiento había adquirido el inmueble en el año 2006 con objeto de promover la investigación arqueológica de los restos.

Requeridos los preceptivos informes al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y a la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Cultura, por parte del Consistorio se nos respondió con un escrito en el que prácticamente se limitaba a recriminar la escasa ayuda proporcionada por la Consejería de Cultura y por la Diputación Provincial para la conservación del Monumento, haciendo hincapié en las “competencias exclusivas” de la Administración Autonómica en materia de cultura.

Por su parte la Delegación Provincial de Cultura remitió un escrito manifestando haber enviado a sus servicios técnicos al municipio de Alhaurín el Grande con el fin de realizar visita a dicho inmueble y comprobar su estado de abandono para determinar las medidas de protección más urgente que debería adoptar el Ayuntamiento, titular del mismo.

A la vista de la escasa información obtenida sobre el estado de las “Torres de Fahala” de los informes recibidos, nos vimos obligados a dirigirnos nuevamente a la Delegación Provincial de Cultura solicitándole que se nos diese debido traslado del resultado de la actuación inspectora, así como de las medidas que se acordasen adoptar para la protección del inmueble.

Asimismo, aprovechamos la ocasión para trasladar a la Administración autonómica las consideraciones vertidas desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande con relación a su obligación de defensa y conservación del patrimonio y la necesidad de contar con el apoyo de otras Administraciones, solicitando igualmente que nos informase acerca de las posibles medidas de cooperación y asistencia que pudieran establecerse desde la Consejería de Cultura en ejecución del mandato contenido en el artículo 4.1 de la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, relativo al deber de colaboración entre Administraciones Públicas para la defensa, conservación, fomento y difusión del Patrimonio Histórico.

Asimismo, consideramos conveniente dirigirnos a la Corporación municipal a fin de aclararle que también corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos (artículo 4.2 de la citada Ley). Asimismo, tratándose de un inmueble de propiedad municipal, le indicamos que le correspondía el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantizase la salvaguarda de sus valores (artículo 14.1 LPHA).

Como respuesta a estas nuevas peticiones de información se recibieron sendos informes de las Administraciones interpeladas, consistentes ambos en copia de informes evacuados por los técnicos adscritos a la Delegación Provincial y el Ayuntamiento respectivamente y de los que cabía deducir una coincidencia en cuanto a la necesidad de acometer medidas de conservación y restauración del BIC y una total discrepancia respecto a las causas que motivaban tal situación y las responsabilidades derivadas de tal situación.

Por parte de la Delegación Provincial se recalcan las responsabilidades del Ayuntamiento en relación a su estado de conservación del BIC por su condición de titular del mismo, mientras que por el Ayuntamiento se dejaba claro que cualquier actuación restauradora precisaría de la ayuda de la Administración Autonómica ante la insuficiencia de recursos humanos y materiales a disposición del Ente Local.

Así las cosas, y entendiendo esta Institución que resultaba prioritario garantizar la integridad del BIC, nos dirigimos nuevamente a ambas Administraciones instándolas a resolver las discrepancias existente y a poner en común los medios y recursos para dar una respuesta eficaz a las necesidades de conservación del Bien.

Como resultado de esta intervención se recibió un informe de la Consejería de Cultura que daba cuenta de la celebración de una reunión con los responsables del Ayuntamiento a resultas de la cual se había acordado un plan de acción conjunto que posibilitaría una adecuada conservación del BIC.

A la vista de esta respuesta consideramos oportuno dar por concluidas nuestras actuaciones.

Otro expediente que consideramos interesante reseñar es el correspondiente a la **queja 08/4200**, iniciado de oficio por esta Institución tras tener conocimiento del estado de creciente deterioro en que se encontraba la Iglesia del Divino Salvador ubicada en la localidad onubense de Cortegana.

La Iglesia Parroquial del Divino Salvador de Cortegana es la síntesis de la confluencia de varios estilos arquitectónicos, que la sitúan cronológicamente entre los siglos XIV y XX. Se trata de una maravillosa joya de la arquitectura, compendio de caracteres mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos.

Durante más de seis siglos la estructura se ha mantenido firme y erguida, pero a partir de la segunda mitad de 1990 empiezan a aflorar diversas patologías en la base y en el fuste de una de sus columnas.

Según los datos que obraban en esta Institución, en el año 2000 se creó un Plan de Actuación para el Estudio de la Iglesia del Divino Salvador, con un presupuesto de 1.997.450 pesetas. Ese mismo año, el laboratorio VORSEVI, S.A., llevó a cabo un estudio minucioso que puso de manifiesto que existía un problema en el interior de la columna, que se solventaría inyectándole algún material de alta resistencia.

Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, aún no se habían tomado medidas para solucionar los problemas existentes en el inmueble.

El estado ruinoso que se apreciaba a primera vista, las nuevas fisuras aparecidas, las humedades por paredes y bóvedas, la rotura de las cornisas, las campanas a punto de desplomarse y el estado catastrófico en general, eran un fiel y claro reflejo de la situación tan crítica que sufría un edificio tan emblemático.

Ante tal situación, y considerando que la situación de riesgo en que se encontraba este edificio histórico era consecuencia de una deficiente conservación del mismo que podría poner en riesgo su indemnidad, se procedió a solicitar los preceptivos informes a las Administraciones implicadas, autonómica y local.

Recibidos los informes interesados comprobamos que existía una coincidencia entre las Administraciones competentes en cuanto a considerar que el estado de conservación de la Iglesia del Divino Salvador era muy deficiente y precisaba de una intervención de urgencia que consolidase sus elementos mas deteriorados y que presentaban mayor

riesgo de destrucción. Todo ello, sin perjuicio de la necesidad de acometer tareas de restauración en el inmueble que mejorasen el estado general de conservación del Bien.

Asimismo, se deducía del informe evacuado por la Consejería de Cultura que la restauración de esta Iglesia se encontraba contemplada dentro del Convenio Marco suscrito el 7 de Marzo de 2007 con el Obispado de la Diócesis de Huelva como uno de los programas de intervención a desarrollar en ejecución de dicho Convenio, requiriéndose para ello un convenio específico en el que se concretarían las inversiones a realizar por las partes implicadas y se detallarían las intervenciones a ejecutar.

A este respecto, del informe evacuado por el Ayuntamiento se deducía el compromiso adquirido por el Pleno de la Entidad Local en orden a participar en la financiación y ejecución del programa de intervención destinado a restaurar y mejorar la conservación de la Iglesia del Divino Salvador.

De igual modo, se deducía del informe evacuado por el Ayuntamiento la existencia de un acuerdo con el Obispado de Huelva para la participación del mismo en la financiación de las obras de restauración.

Por otro lado, a través de los medios de comunicación tuvimos conocimiento de desprendimientos habidos en la Iglesia del Divino Salvador que, aparte del riesgo para posibles viandantes, ponían de manifiesto la necesidad de acometer sin mas demora las obras de restauración de dicho Bien patrimonial.

Por todo ello, partiendo de la coincidencia entre las partes implicadas –Consejería de Cultura, Ayuntamiento y Obispado de Huelva- respecto a la necesidad y urgencia de las obras de restauración y conservación, así como sobre la conveniencia de un convenio específico que detallase las aportaciones de las partes y delimitase las competencias de cada una en cuanto a las obras a realizar, y tomando en consideración que, pese a la existencia de estos acuerdos, el tiempo pasaba y no acababan de adoptarse las decisiones necesarias para convertir los compromisos asumidos en realidades tangibles que posibilitasen el inicio sin mas dilaciones de las necesarias obras de consolidación y restauración del bien amenazado, consideramos oportuno dirigirnos a las Administraciones implicadas formulando a las mismas la siguiente **Recomendación**.

“Que se proceda sin más demora a la realización de un convenio específico con intervención del Ayuntamiento de Cortegana, la Consejería de Cultura y el Obispado de la Diócesis de Huelva con el fin de acometer con la mayor rapidez posible las obras de consolidación y restauración que precisa la Iglesia del Divino Salvador de Cortegana.”

Las respuestas positivas recibidas a esta Recomendación nos han permitido proceder al archivo del expediente de queja.

Por último, nos referiremos a la **queja 08/5510**, iniciada de oficio tras la aparición de noticias en prensa que advertían del estado lamentable en que se encontraría uno de los inmuebles históricos de la capital granadina, la Hacienda de Jesús del Valle. Se trata de un convento jesuita del siglo XVI, declarado bien de interés cultural desde Mayo de 2005.

Conocidos estos hechos por esta Institución, se solicitaron los preceptivos informes al Ayuntamiento de Granada y a la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Cultura.

La Delegación Provincial de Cultura ponía de manifiesto en el informe que nos fue remitido que la Hacienda, de propiedad particular, se inscribió en el Catálogo General

del Patrimonio Histórico con la categoría de Monumento atendiendo, además de su valor patrimonial, al estado de conservación en que se encontraba el edificio.

Según la información facilitada, la iniciación del procedimiento de inscripción había tenido lugar en el año 2003, a raíz de la visita de inspección realizada con motivo de una denuncia. En dicha visita se pudo comprobar el estado generalizado de abandono del conjunto de edificaciones de la hacienda, sin que se hubieran realizado obras de mantenimiento de ningún tipo. Además, dos de los elementos más significativos del complejo, la cubierta de la crujía delantera y la arquería de ladrillo situada bajo la misma se habían derribado parcialmente. El escudo de la portada principal se había desmontado y se había demolido tabiquería, levantado solería y realizado excavaciones y demoliciones parciales de forjados.

La actuación de la Delegación, según se relataba a continuación, se centró en requerir al Ayuntamiento información sobre el estado de conservación del inmueble y las medidas que hubiese adoptado, así como en recordar a la propiedad su deber de conservación.

En el año 2007 se tramita nuevo expediente sobre el estado de conservación del Cortijo Jesús del Valle a raíz de las medidas urgentes dictadas por el Ayuntamiento de Granada, realizándose visita de inspección y acordándose por Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de fecha 7 de Mayo de 2007 la autorización de las medidas propuestas por el Ayuntamiento. Estas medidas, según informa la Delegación Provincial de Cultura, tendrían como finalidad la conservación del inmueble en tanto se aprobase un proyecto de rehabilitación con intención de poner en uso la hacienda como hotel, según era intención de la propiedad.

El informe concluía afirmando que se había producido un incumplimiento del deber de conservación que incumbe a las personas propietarias de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz y, literalmente, señalaba en su último párrafo:

“Por este motivo se realizará nueva visita de inspección por técnico competente para comprobar el estado de conservación que en la actualidad presenta el inmueble y volver a instar al propietario desde el Ayuntamiento y la Delegación a que adopte las medidas necesarias para su conservación entre tanto no se presente un proyecto compatible con la conservación de los valores del inmueble. De no actuar en consecuencia plantearemos la posibilidad de la apertura de expediente sancionador, o de adoptar las medidas coercitivas que establece la Ley para obligar a la propiedad a actuar sobre el inmueble.”

Por su parte, el escrito informativo remitido por el Ayuntamiento de Granada, acompañado de informe técnico y diversa documentación relativa a actuaciones tanto del Ayuntamiento como de la Delegación Provincial de Cultura, destacaba *“que corresponde en exclusiva a la Consejería de Cultura el ejercicio de actuaciones en este tipo de Bienes”*.

El informe de la Oficina Técnica de Arqueología Municipal adjuntado se remontaba a los antecedentes históricos de la Hacienda, indicando que ya desde las últimas décadas del siglo XX el edificio quedó abandonado y fue sometido a un terrible expolio.

Según los datos obrantes en el servicio municipal, además de la inscripción en el CGPHA como Monumento, el inmueble había quedado protegido por el PGOU de Granada 2000 y por el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada.

Asimismo, el informe relacionaba las actuaciones municipales desarrolladas con respecto a la situación de la Hacienda Jesús del Valle:

“- Informes municipales de la GERENCIA DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA (Técnico Municipal adscrito a UNIDAD TÉCNICA DE RUINAS y de Técnico Municipal de OFICINA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA MUNICIPAL) al inmueble en cuestión, elaborando sendos informes acerca del estado actual tras la visita realizada a la zona y al inmueble (fecha 8 de febrero de 2007).

- Informe municipal de la GERENCIA DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA (SUBDIRECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN, SERVICIO DE PROTECCIÓN A LA EDIFICACIÓN, UNIDAD TÉCNICA DE RUINAS) proponiendo informe-propuesta y firmado por el Jefe de Servicio y Subdirector de Arquitectura, de fecha 9/02/2007.

- Certificación municipal del ACUERDO de la Comisión Ejecutiva de la GERENCIA DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA (Núm. 418, de fecha 13 de febrero de 2007), ordenando al propietario la adopción de MEDIDAS URGENTES PROVISIONALES.

-Notificación municipal dirigida al Área de Economía y Hacienda del AYUNTAMIENTO DE GRANADA al propietario del inmueble, (...), firmada por el Jefe del SERVICIO DE PROTECCIÓN A LA EDIFICACIÓN de la GERENCIA DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA de fecha 26/02/2007.”

Igualmente, el informe se refería a la Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de fecha 7 de Mayo de 2007, por la que se autorizaban las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento (a la que hacía mención la Delegación Provincial de Cultura), así como a otra Resolución del mismo organismo, de fecha 6 de Noviembre de 2006, por la que, tras visita de inspección con fecha 31 de Octubre de 2006, en la que se comprobó el deficiente estado de conservación del conjunto tanto por la exposición a los agentes meteorológicos como por los expolios a los que estaba siendo sometido debidos al abandono del mismo y la posibilidad de acceder libremente por el inmueble, se acuerda:

“1. Ordenar a ..., en cuanto que titular de los bienes afectados, que proceda a realizar, en el edificio situado en la Hacienda-Cortijo Jesús del Valle de Granada, las obras de demolición, finalización, mantenimiento y ornato, necesarias para restaurar la imagen del bien protegido, que expresamente se establecen en el Fundamento 8 de esta Resolución.

2. Advertir a ... de que, de no realizar dichas actuaciones en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la notificación, se procederá a la ejecución forzosa de las mismas, así como a la imputación de las responsabilidades a que hubiere lugar.

3. Que se comuniquen esta Resolución al interesado, así como que se comuniquen al Ayuntamiento de Granada y a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos oportunos.”

Consideraba el informe de la Oficina Técnica de Arqueología Municipal, con cita a los artículos 23 a 25 del *Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía*, cuya vigencia mantiene la *Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía*, que correspondía en exclusiva a la Consejería de Cultura el ejercicio de actuaciones (órdenes de ejecución forzosa) y sanciones coercitivas en este tipo de bienes.

A modo de conclusión final, y con fundamento en la visita realizada el día 13 de Febrero de 2009, señalaba el informe:

“ (...) dado que el inmueble se encuentra en un estado de deterioro aumentado desde la última visita dado que no se han adoptado las medidas urgentes dispuestas en la Resolución última de la Consejería de Cultura, con “okupas” alojados en el molino de la entrada, con fuertes desplomes de cubiertas y forjados entreplantas de la zona del patio interior y Casa Grande, almazara, cocina..., tal y como se aprecia en las fotografías, se propone: dar traslado y conocimiento de este informe sobre el estado actual del Bien Inmueble Inscrito B.I.C. como Monumento (fecha 27/05/2005) a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la JUNTA DE ANDALUCÍA en Granada, al ser competencia exclusiva de esta Institución, al objeto de que se adopten las medidas oportunas, dado que en el TÍTULO XIII. RÉGIMEN SANCIONADOR. CAPÍTULO Y, de la Ley 14/2007, se indica con claridad:” (y transcribe los artículos 106, 107 y 108.1.a) y b), 2 y 3).

Según la documentación anexada al informe del Ayuntamiento de Granada, la Resolución de 6 de Noviembre de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, ordenó la adopción de una serie de medidas de conservación, con advertencia de la posibilidad de ejecución forzosa de las mismas.

Asimismo, consultada la documentación aportada por el Ayuntamiento de Granada, pudimos comprobar que las medidas urgentes provisionales que éste acordó en Febrero de 2007 (y que fueron posteriormente autorizadas por Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de fecha 7 de Mayo de 2007), eran sustancialmente coincidentes con las ya acordadas el 6 de Noviembre de 2006, resultando además que, para la ejecución de tales medidas se concedía un plazo de 24 horas desde la notificación del acuerdo. Como medidas secundarias, dado el interés y catalogación del inmueble, el Ayuntamiento de Granada ordenaba a la propiedad a realizar la completa rehabilitación del mismo, presentando el correspondiente proyecto para el otorgamiento de licencia municipal en un plazo no superior a 30 días.

En caso de incumplimiento de las medidas acordadas, se hacía expresa advertencia de la posibilidad del Ayuntamiento de acudir a la ejecución subsidiaria, la imposición de multas coercitivas y la expropiación forzosa del inmueble por incumplimiento del deber de conservación.

De los antecedentes de hecho expuestos anteriormente y de la normativa que resultaba de aplicación a los mismos, se deducía claramente que a lo largo del periodo analizado de 6 años se venía produciendo un estado de deterioro progresivo de las condiciones de conservación de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, del que tenían cumplido conocimiento las dos Administraciones con competencias en materia de conservación y protección del patrimonio histórico –Consejería de Cultura y Ayuntamiento de Granada- sin que por parte de las mismas se hubieran realizado las

actuaciones que resultarían precisas para garantizar, de modo efectivo, la salvaguarda e indemnidad de dicho BIC en los términos requeridos por la legislación vigente.

A este respecto, no podemos dejar de reseñar la pasividad mostrada por la Delegación Provincial de Cultura y el Ayuntamiento de Granada en el cumplimiento de las funciones tuitivas que el ordenamiento jurídico les encomienda respecto del Bien cultural amenazado (Art. 46 de la Constitución Española, Art. 7 de la Ley 16/1985, Arts. 4 y 5.1 de la Ley 1/1991 y Arts. 4 y 15 de la Ley 14/2007).

Asimismo, debemos destacar la escasa diligencia mostrada por la Consejería de Cultura en la adopción de medidas destinadas a evitar el constatado y reiterado incumplimiento del deber de conservación por parte de la titularidad del Bien.

A este respecto, debemos resaltar que las obras inmediatas de conservación ordenadas por la Consejería de Cultura en Noviembre de 2006 e incluso las calificadas de URGENTES por el Ayuntamiento de Granada en Febrero de 2007, y para cuya ejecución existía un plazo máximo de 24 horas, no sólo no se han ejecutado, sino que ni tan siquiera parecía existir o haberse aprobado el obligatorio proyecto de ejecución.

Y todo ello, sin que por la Consejería de Cultura se hubiese dictado la tantas veces anunciada orden de ejecución, ni menos aún se hubiera adoptado alguna de las medidas para la ejecución forzosa de dicha orden (multas coercitivas, ejecución subsidiaria, expropiación forzosa) permitidas por la legislación vigente durante este periodo (Arts 36.3 y 4 de la Ley 16/1985, Arts. 16, 17 y 19 de la Ley 1/1991 y Arts. 15, 16 y 18 de la Ley 14/2007).

Tampoco constaba en la información recabada que durante todo este tiempo por parte del Ayuntamiento de Granada se hubieran adoptado medidas efectivas destinadas a garantizar la protección del BIC y su adecuada conservación y mantenimiento, pese a venir obligado a ello por la legislación vigente (Art. 7 de la Ley 16/1985, Art. 4 de la Ley 1/1991, Arts. 4.2 y 18.3 de la Ley 14/2007).

Por todo lo anterior, nos vimos en la necesidad de formular a las Administraciones competentes las siguientes **Resoluciones**:

*“**Recomendación** para que se dicten con carácter inmediato las pertinentes órdenes de ejecución a la propiedad del BIC “Hacienda-Cortijo Jesús del Valle” para la urgente rehabilitación y conservación del Bien.*

***Recomendación** para que, en caso de no ser ejecutada la orden de ejecución en los plazos que en la misma se determinen, se proceda de inmediato a aplicar las medidas de ejecución forzosa contempladas en los arts. 16 y 18 de la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.*

***Recomendación** para que se incoe procedimiento sancionador contra la titularidad del BIC “Hacienda-Cortijo Jesús del Valle” al haberse constatado, según visita de inspección municipal de 13 de febrero de 2009, que persiste el incumplimiento por la misma de su deber de conservación del Bien.”*

Como respuesta a esta Resolución se han recibido sendos escritos de las Administraciones interpeladas manifestando ambas su total aquiescencia con el contenido de dichas Recomendaciones y su voluntad de acatamiento de las mismas.

No obstante, el informe evacuado por la Delegación Provincial de Cultura manifestaba que se iba a enviar nuevamente a los técnicos a visitar el bien con intención de formular una nueva orden de ejecución a la propiedad del BIC y para fundamentar un posible procedimiento sancionador por incumplimiento de las ordenes anteriores.

A este respecto, y antes de concluir el expediente hemos considerado oportuno esperar a conocer el resultado de esta actuación inspectora de la Administración autonómica.

2. 2. Deportes.

2. 2. 1. Accesibilidad en los centros deportivos.

Esta Institución viene prestando una especial atención a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta atención se ha visto especialmente reforzada, en ejercicio de las competencias propias de este Comisionado, desde que el Estatuto de Autonomía para Andalucía ha recogido la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad como uno de los objetivos básicos de la Comunidad (artículo 10.3.16), así como su derecho a acceder a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social (artículo 24).

También supuso un importante respaldo la aparición en nuestro ordenamiento jurídico de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado por España, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Una de las actuaciones desarrolladas en el ejercicio pasado para la defensa de este colectivo puede apreciarse en la **queja 08/2190**. Esta queja se iniciaba mediante denuncia de un particular relativa a la falta de accesibilidad de un centro deportivo de titularidad municipal, en concreto de las zonas comunes (escaleras, pasillos y ascensores) y especialmente de las zonas de acceso a vestuarios, duchas, aseos de la piscina, sauna y zona de musculación.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Córdoba, nos indicó que el IMDECOR había realizado todas las actuaciones necesarias encaminadas a garantizar la completa accesibilidad de las instalaciones y espacios de uso del centro deportivo, en la medida en que las disponibilidades de su presupuesto anual se lo habían permitido.

En lo referente a la reclamación por deslizamiento sobre pavimento, se nos informó que el IMDECOR tenía ya definidas las actuaciones encaminadas a solucionar la incidencia, estimando que, durante el 2009, podrían comenzarse las de mayor prioridad (entre las que se encontraba la reclamada) y que, en una segunda fase, se acometerían las actuaciones recomendadas por la Oficina para la Accesibilidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo referidas a otras de mayor envergadura por afectar a elementos estructurales de la instalación.

En un segundo informe de ampliación que nos fue remitido, se reiteraban las actuaciones prioritarias y las recomendadas por la Oficina de Accesibilidad cuya ejecución estaba prevista y se nos daba traslado de una propuesta técnica de adaptación de itinerarios en el centro deportivo. Asimismo, se nos informaba que el IMDECOR había subsanado los problemas de financiación existentes, por lo que se estaba en disposición de acometer las actuaciones indicadas por la Oficina de Accesibilidad.

A la vista de dicha información deducíamos que existía una voluntad clara por parte del Ayuntamiento de Córdoba de acometer todas las actuaciones necesarias para garantizar la completa accesibilidad de las instalaciones del centro deportivo, y la eliminación de barreras arquitectónicas que toda norma sobre discapacidad exige. Prueba de ello considerábamos que era la existencia de un informe técnico de adaptación de itinerarios en el citado centro deportivo realizado por la Oficina de Accesibilidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

A pesar de la buena disposición de la Corporación en el cumplimiento de sus obligaciones legales, debimos recordarle que dichas actuaciones ya tendrían que haberse efectuado, más aún teniendo en cuenta la fecha de edificación del recinto, cuya construcción databa del año 1993. Así se desprendía de la normativa en materia de discapacidad, especialmente de la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía, que estableció un plazo de tiempo limitado para que todos los edificios e instalaciones de las Administraciones se adaptaran a las personas con cualquier tipo de discapacidad, facilitando su acceso a los mismos.

Asimismo, le indicábamos que extrañaba el hecho de que sólo existiera una propuesta seria, por parte de la Administración, de llevar a cabo las actuaciones más prioritarias, cuando debería haberse aprobado ya un plan general de accesibilidad que garantizase la completa eliminación de las barreras existentes.

En consecuencia, formulábamos **Recordatorio** legal y **Recomendación** para que se procediese a la inmediata y total supresión de las barreras arquitectónicas en el centro deportivo, a fin de garantizar a las personas con discapacidad su derecho a una plena accesibilidad de las zonas, instalaciones y espacios de uso del recinto.

Dicha Resolución fue aceptada por el Ayuntamiento de Córdoba, manifestando la Oficina para la Accesibilidad que con ello se pretendía dar continuidad a las gestiones realizadas para conseguir el objetivo de accesibilidad. En consecuencia, procedíamos al archivo del expediente de queja, dando traslado a la persona interesada del resultado favorable a su pretensión.

Tiempo después, la misma persona denunciaba que aún no se habían iniciado las obras pertinentes y no se le había informado al respecto. No obstante, consideramos que la envergadura de las obras de adaptación necesarias suponía la realización de unos trámites económicos y administrativos para cuya conclusión no había tenido tiempo suficiente la Administración. En consecuencia, estimamos oportuno ampliar el plazo necesario para la ejecución de las medidas de accesibilidad, sin perjuicio de que esta Institución pueda reanudar sus actuaciones una vez se conozca que no se haya dado cumplimiento a la resolución adoptada.

En la tramitación de la **queja 08/4810** también se puso de manifiesto el incumplimiento de la normativa de accesibilidad en las instalaciones públicas, especialmente teniendo en cuenta que la instalación denunciada había sido recientemente construida.

La queja se iniciaba mediante denuncia, de una asociación de defensa de personas con discapacidad, relativa a la falta de accesibilidad de la piscina cubierta municipal, exigiendo del Ayuntamiento de Puente Genil el adecuado equipamiento de dicha piscina. los problemas de accesibilidad que presentaba la piscina se referían a la falta de baranda en las escaleras de la misma, así como de silla hidráulica para el traslado de personas con discapacidad y mayores al agua, razón por la que estas personas debían ser ayudadas cada vez que pretendían acceder a la piscina.

En contestación a nuestro requerimiento, el Ayuntamiento nos indicaba que la puesta en marcha y apertura al público de la piscina (con dos vasos: polivalente y de enseñanza) se realizó el 3 de Noviembre de 2008 y que, en el plazo transcurrido hasta la fecha del informe (12 de Marzo de 2009), se habían realizado las adaptaciones exigidas por la normativa en estas instalaciones.

Según la información facilitada, la instalación de la silla hidráulica en el vaso polivalente tuvo lugar con fecha 29 de Enero de 2009, permitiendo la entrada y salida del agua a las personas con movilidad reducida. Por otra parte, el vaso de enseñanza contaba con acceso en escalera, las cuales tenían barandilla desde la fecha de inauguración de la instalación.

Del contenido del informe recibido dimos traslado a la entidad interesada para que presentase las consideraciones que estimase convenientes. En su respuesta, la Asociación ponía de manifiesto la falta de justificación del incumplimiento de la normativa y requisitos exigibles a la piscina sobre accesibilidad, desde su apertura al público (3 de Noviembre de 2008) hasta el día 29 de Enero de 2009.

Además, se denunciaba que la silla se habría roto el 17 de Abril, sin que hubiera sido reparada en el plazo de un mes, por lo que nuevamente era necesario para las personas con movilidad reducida tuvieran que contar con ayuda de terceras personas para entrar y salir de la piscina.

También se destacaba que las escaleras del vaso polivalente carecían de barandilla y que el hecho de que las escaleras del vaso de enseñanza contasen con barandilla no permitía su acceso a las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Con referencia a los derechos estatutarios y constitucionales que consideramos afectados y a la normativa de accesibilidad de edificios e instalaciones públicas, así como ante la existencia de un Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, que contempla expresamente entre sus previsiones la supresión de barreras arquitectónicas, estimamos oportuno dirigir al Ayuntamiento **Recordatorio** legal y **Recomendación** para que se procediese a la total supresión de los obstáculos a la accesibilidad universal en la piscina cubierta municipal, de forma que fuese posible acceder a todas las zonas, instalaciones y espacios de uso del recinto. Las consideraciones expuestas hacían referencia a los principios y especificaciones sobre accesibilidad universal y diseño para todos recogidos en diversa normativa autonómica y estatal, entre otros, el Decreto 92/1992, de 5 Mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía; la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía; la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad; y el Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril, sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

Entre las consideraciones de la Resolución dictada también hicimos mención a la reciente aprobación de la norma que sustituye al Decreto 92/1992, el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, ya que en su Título II, Sección 8ª, se establecen las condiciones generales de accesibilidad de las piscinas de concurrencia pública, si bien éstas no serían obligatorias hasta después de diez años de su entrada en vigor.

En respuesta a esta Resolución, el Ayuntamiento manifestó que la piscina cubierta cumple con las determinaciones sobre supresión de barreras arquitectónicas contenidas en la normativa vigente y que las condiciones de accesibilidad del Decreto 293/2009 no serán obligatorias hasta 2019.

En este sentido señalaba que las operaciones necesarias para dar cumplimiento a la nueva normativa (dotar de pasamanos a la escalera de acceso al vaso polivalente) exige una inversión elevada –pues es necesario romper el vaso de hormigón-. El Ayuntamiento, finalmente, se comprometía a ejecutar dichas obras en el momento en que se cuente con los recursos necesarios y, en cualquier caso, siempre antes de la fecha límite marcada por la legislación.

A la vista de esta información, esta Institución consideró oportuno dirigirse nuevamente al Ayuntamiento recordándole, en primer lugar, que, hasta la instalación de la silla hidráulica, el vaso polivalente de la piscina no contaba con ninguna medida de accesibilidad para las personas con movilidad reducida hasta casi tres meses después de su apertura al público. En segundo lugar, le indicamos que, si bien era cierto que, en el momento de redactarse el proyecto y ejecutarse las obras de la piscina municipal aún no se había aprobado el Decreto 293/2009, sí estaban vigentes otras normas que imponían exigencias de accesibilidad a los edificios e instalaciones de concurrencia pública.

Asimismo, le hicimos saber que, teniendo en cuenta los preceptos citados en la Resolución dictada así como la abundante normativa que se refiere a la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, no podíamos sostener que la piscina municipal cumpliera con las determinaciones vigentes sobre supresión de barreras arquitectónicas. En este sentido, consideramos que, si bien no existía una norma técnica específica que estableciera las condiciones de accesibilidad de las piscinas de concurrencia pública, lo cierto es que el acceso a los vasos de la piscina no era posible de modo autónomo y seguro para las personas con movilidad reducida. En el caso del vaso polivalente, dicha dificultad derivaba de la inexistencia de pasamanos a lo largo del recorrido de la escalera y, en el caso del vaso de enseñanza, por la ausencia de silla hidráulica.

En consecuencia, indicamos al Ayuntamiento que debía adoptar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal de ambos vasos de la piscina municipal, en tanto no se llevaran a cabo las obras necesarias para adaptarse a las exigencias del Decreto 293/2009.

En respuesta a nuestras indicaciones, el Ayuntamiento aclaró que el aparato elevador del que dispone la piscina es móvil, por lo que presta servicio tanto al vaso polivalente como al vaso de enseñanza. A la vista de esta información y considerando que el asunto se encontraba en vías de solución, dimos por concluido el expediente de queja.

2. 2. 2. Derecho de acceso a instalaciones deportivas municipales.

El asunto, objeto de la **queja 07/4368**, vino referido al derecho de la ciudadanía a practicar libremente el deporte, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, en relación con el deber de las Administraciones públicas de tutelar su ejercicio, así como de actuar de acuerdo con los principios de buena administración y respeto de la confianza legítima (artículos 31 y 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Los hechos descritos en el escrito de queja de un Club Deportivo se referían a la negativa del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla a permitirles el acceso a sus instalaciones hasta la total satisfacción de las deudas pendientes derivadas del uso

de una piscina municipal. Alegaba la representación del Club que el impago era sobradamente conocido y consentido por el Ayuntamiento, pues debía hacerse por anticipado al uso de las instalaciones por lo que no resultaba comprensible que se reclamase el pago de varios años sin que hubiese sido requerido anteriormente.

Admitida a trámite la queja y tras recibir el preceptivo informe del IMD, que hubo de complementarse con otro aclaratorio y alegaciones de la parte interesada a los mismos, pudimos concluir que la deuda contraída por el Club Deportivo respondía a la falta de diligencia del propio organismo municipal en la exigencia del pago del correspondiente precio público durante un período de tiempo superior a cinco años, lo que incluso podría suponer pérdidas en el erario público como consecuencia de la prescripción de deudas. La única comunicación escrita exigiendo el pago de la deuda tuvo lugar el 18 de Enero de 2006, pero la misma no dio lugar a ninguna actuación ulterior del IMD para su cobro efectivo.

En este sentido, la normativa municipal (Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas de la Ciudad de Sevilla, aprobado en sesión plenaria de 28 de Mayo de 1997, y Ordenanzas reguladoras del precio público por prestación de servicios y actividades deportivas vigentes durante las temporadas en que sucedieron los hechos) establecía el abono del precio por adelantado y la aplicación del procedimiento de apremio para exigir las deudas por impago.

Por otra parte, respecto al argumento esgrimido por el Club de acogerse a bonificaciones de hasta el 100% en el precio público, hubimos de manifestar -coincidiendo con el IMD- que a tal efecto era necesaria la formalización de un convenio y que la falta de respuesta a la solicitud formulada por el Club en Octubre de 2004 suponía la desestimación presunta de la pretensión y no, como pretendía la parte promotora de la queja, la estimación de la misma y, por ende, la aprobación tácita de la propuesta de convenio presentada.

En consecuencia, el Club Deportivo venía obligado al pago anticipado del precio público si quería hacer uso de las instalaciones deportivas municipales, no debiendo habersele permitido el acceso a las mismas sin acreditar previamente dicho pago.

No obstante, también manifestábamos que la situación de flagrante incumplimiento de la normativa de aplicación se había producido con pleno conocimiento y como consecuencia de instrucciones directas impartidas por el Sr. Concejal responsable del IMD, como palmariamente se reconocía en los informes remitidos. Considerábamos, pues, que la actuación municipal había podido crear una apariencia de buen derecho en la parte interesada, induciéndole a pensar con fundamento que el convenio solicitado se encontraba en vigor, ya que se estaba aplicando, de hecho, la bonificación pretendida -al permitirse reiteradamente a las personas integrantes del Club el acceso a la instalación deportiva sin exigir el pago anticipado del precio público correspondiente-, máxime cuando se había puesto en conocimiento del IMD la imposibilidad económica de hacer frente a tales pagos.

Estimando que la situación era consecuencia, en gran medida, del incumplimiento por el IMD de los principios de buena administración y respeto a la confianza legítima, y tomando en consideración las dificultades económicas alegadas por el Club Deportivo, consideramos que debería estudiarse la posibilidad de conceder algún tipo de ayuda o subvención al Club que le permitiese disponer de liquidez para satisfacer la deuda pendiente y regularizar su situación con las arcas municipales

Atendiendo a todas estas consideraciones, con fecha 3 de Febrero de 2009, nos permitimos formular al IMD las siguientes **Resoluciones**:

*“1. **Recomendación.** Que por el Ayuntamiento de Sevilla se tramiten los procedimientos necesarios para el cobro de la deuda devengada por el Club XXX por el concepto de precio público por el uso de instalaciones deportivas municipales.*

*2. **Recomendación.** Que por el Ayuntamiento de Sevilla se inicie un procedimiento de investigación para la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar por la irregular actuación del Instituto Municipal de Deportes en el presente asunto y para el resarcimiento, en su caso, de las pérdidas sufridas por el erario público como consecuencia de la prescripción de deudas.*

*3. **Sugerencia.** Que por el Ayuntamiento de Sevilla se estudie la posibilidad de conceder algún tipo de ayuda o subvención al Club XXX que permita al mismo, a cambio de realizar labores de promoción del deporte entre los menores y jóvenes de Sevilla, disponer de liquidez para satisfacer la deuda pendiente y regularizar su situación con las arcas municipales.”*

Posteriormente el IMD nos comunicó la aceptación de dichas resoluciones, indicándonos, respecto a las Recomendaciones dirigidas, que se iniciarían de inmediato los procedimientos necesarios para el cobro de la deuda y que se promoverían las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar por la actuación ineficaz en el cobro del precio público por uso de las instalaciones deportivas. En cuanto a la Sugerencia, si bien se nos indicaba que se estudiaría la posibilidad de articular algún instrumento para la satisfacción de las deudas, previamente debía existir un compromiso de pago así como acreditarse suficientemente la indisponibilidad de liquidez por parte del Club.

A la vista de dicha información concluíamos que el IMD aceptaba la Resolución formulada, dimos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

SECCIÓN CUARTA:

DE LAS QUEJAS REMITIDAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES

ÁREA DE CULTURA.

En **materia de Cultura y Deporte** durante el año 2009 se han remitido dos quejas al Defensor del Pueblo Estatal. De ellas merece destacar la **queja 09/211**, en la parte promotora de la queja denunciaba la situación en la que se encontraba el cementerio español de Alhucemas (Marruecos).

Tras analizar la queja que el interesado nos planteaba informamos al mismo que esta Institución carecía de competencias para entrar a conocer sobre su reivindicación, toda vez que la misma no afectaba al ámbito de competencias de la Administración andaluza, ya que el problema que planteaba afectaba al Ministerio de Exteriores.

Así pues, se indicó al interesado que procedíamos a remitir su queja al Defensor del Pueblo por ser esta Institución la competente para tramitar su queja.